



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/37517

23/03/2021

88497

AUTOR/A: PÉREZ SICILIA, Borja (GPP); ANTONA GÓMEZ, Asier (GPP); RAMOS ACOSTA, Sergio (GPP)

RESPUESTA:

Las Comunidades Autónomas insulares españolas son (con pequeñas variaciones interanuales) los dos principales destinos turísticos de España, y representan por sí solas casi la mitad del flujo turístico en circunstancias normales.

La Comunidad Autónoma de Canarias se caracteriza por una elevada dependencia del turismo. La cifra se sitúa cerca del 35% del PIB insular, lo que a su vez representa el 40% de la afiliación a la Seguridad Social en las islas.

En este contexto, la Unión Europea ha lanzado el fondo Next Generation EU, un mecanismo de financiación de los Estados miembros mediante mutualización de deuda pionero en la historia comunitaria.

Tras el reparto negociado en el Consejo Europeo, han correspondido al turismo español un total de 3.400 millones de euros que se ejecutarán por medio del Plan de Modernización y competitividad del Sector Turístico.

Para el ejercicio 2021, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ha previsto en su anexo 1 la partida presupuestaria 430A destinada a Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)-Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un total de 1.289.200,00 miles de euros.

Es un ambicioso plan de inversiones y reformas que tiene por objetivo mantener el liderazgo de España en materia de competitividad turística, aprovechando las necesarias transformaciones del modelo tras la pandemia.



Este plan se vertebra en torno a 5 ejes:

1. Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.
2. Desarrollo de producto turístico y modernización del ecosistema público privado.
3. Digitalización e inteligencia turística.
4. Estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares.
5. Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad.

Es precisamente con el cuarto de estos pilares “Estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares” con el que el Gobierno de España dará cumplimiento al mandato de la Cámara Alta, concretamente por medio de la Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias.

Este proyecto tiene como objetivo la firma de un convenio específico con la comunidad insular (que no limita su participación en otros programas o convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española), con el objetivo de compensar, mediante inversiones transformadoras del modelo, la elevada dependencia del turismo y la subsecuente afectación extraordinaria que la pandemia ha tenido sobre esta industria en el conjunto del archipiélago.

Las acciones que se prevén, sin ánimo de exhaustividad, se encuadran en el marco de:

- Actuaciones de modernización y reconversión de infraestructura turística, en especial en el ámbito de las infraestructuras alojativas, urbanas, portuarias y aeroportuarias, litoral, ocio y en general de lugares de interés turístico y de prestación de servicios al turista.
- Actuaciones en el ámbito de la diversificación económica y la transición hacia sector de economía digital y verde.
- Actuaciones en el ámbito de la protección medioambiental.
- Actuaciones en el ámbito de la formación.
- Actuaciones en el ámbito de la mejora de la conectividad.



- Actuaciones en el ámbito de la ultraperiferia y lejanía, dado el especial estatus geográfico de Canarias y su reconocimiento como región ultraperiférica (RUP).

Esta estrategia de Resiliencia tiene una dotación total de 100 millones de euros y un calendario de ejecución de 3 años, contando con una primera asignación de 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 (aplicación presupuestaria 50.430A.753). Ya se han iniciado contactos entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Este plan será fundamental en la recuperación del Turismo de las islas.

Debe remarcar que desde el inicio de la pandemia, la acción del Gobierno ha estado marcada por proteger el tejido productivo y el empleo. Así, el Gobierno va a seguir ayudando a empresas, trabajadores, autónomos y rentas familiares mientras sea necesario.

Se ha aprobado una ambiciosa red de seguridad, apoyada por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, que se ha ido adaptando a la evolución de la pandemia para proteger especialmente a los sectores más afectados, como el del turismo.

Estas ayudas representan la mayor política de protección sociolaboral de la historia de nuestro país, articulada a través de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prestación extraordinaria para autónomos o las moratorias hipotecarias, entre otras.

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, moviliza 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital.

Estas ayudas se dirigirán a empresas viables en los sectores más afectados por la pandemia, con el fin de canalizar los recursos al conjunto de la economía y de reducir el riesgo de un sobreendeudamiento que pueda lastrar la recuperación económica.

El objetivo es seguir protegiendo el tejido productivo, mantener el empleo, prevenir un impacto negativo en las finanzas públicas y en el sistema financiero y evitar un impacto estructural en la economía.

Para ello, la norma establece diversos instrumentos para que empresas y autónomos puedan hacer frente al pago de facturas con proveedores, costes fijos y otras deudas, financieras y no financieras, mejorando así sus balances y garantizando el mantenimiento de sus negocios.



Las nuevas medidas, junto a las ya acordadas para este año, suponen un esfuerzo fiscal de ayudas directas para proteger el tejido productivo, el empleo y la sanidad que supera el 2% del Producto Interior Bruto.

Son unas medidas entre las que se encuentran los recursos transferidos por el Estado a las Comunidades Autónomas y que están permitiendo ya que movilicen 2.000 millones de euros para ayudar a autónomos y empresas en sus territorios.

Estas ayudas se unen a otras medidas ya vigentes, como las moratorias para el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y otras moratorias para la devolución de los créditos públicos, créditos hipotecarios y préstamos sin garantía hipotecaria con entidades financieras; o el pago de alquileres en el caso de autónomos o personas vulnerables.

Asimismo, complementan los diferentes paquetes de medidas puestos en marcha para apoyar a autónomos y empresas el pasado año, con una movilización de ayudas del 20% del Producto Interior Bruto, que sitúa la respuesta española a las consecuencias sociales y económicas de la COVID-19 entre las más elevadas de los países de la Unión Europea.

El alargamiento de la crisis sanitaria y los efectos en la economía de las medidas adoptadas para frenar su expansión hacen necesario aprobar nuevas ayudas para reforzar la solvencia y evitar un deterioro patrimonial de empresas viables.

Así, con este objetivo se crean tres fondos de ayudas a empresas viables cuya situación patrimonial se haya deteriorado como consecuencia de la pandemia, por un total de 11.000 millones de euros. Adicionalmente, se amplía la vigencia de algunas medidas en el ámbito concursal hasta final de 2021.

La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, así como al mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022.

- Línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a autónomos y empresas.

La nueva Línea de ayudas directas a autónomos y empresas, dotada con 7.000 millones de euros, tiene como objetivo que las Comunidades Autónomas concedan ayudas directas a los autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019.



Estas nuevas ayudas directas no reembolsables se añaden a los fondos, por importe de 24.000 millones de euros, ya transferidos por el Estado a las Comunidades Autónomas en 2020 y 2021 para que den una respuesta sanitaria, económica y social para paliar los efectos de la pandemia. Las Comunidades Autónomas ya han anunciado su intención de utilizar 2.000 millones de euros de estos recursos para ayudas directas a autónomos y empresas.

Las nuevas ayudas establecidas tendrán carácter finalista y se emplearán para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.

Podrán acceder a estas ayudas todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados establecidos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionadas con la cultura y las actividades deportivas. En total, son cerca de un centenar las actividades a las que podrán llegar los recursos. Esta línea constará de dos compartimentos:

El primer compartimento, de 5.000 millones de euros, que se destinará al conjunto de Comunidades Autónomas, salvo Illes Balears y Canarias. La asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT EU -impacto de la pandemia en la riqueza de las Comunidades Autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil-.

El segundo compartimento, de 2.000 millones de euros, se destinará a las Illes Balears y a Canarias, por el impacto diferencial sobre su economía del mayor peso de los sectores más afectados por la pandemia.

Podrán beneficiarse autónomos y empresas viables que hayan tenido una caída de sus ingresos de al menos el 30% en 2020 respecto al año anterior.

Las ayudas cubrirán hasta un 40% de la caída adicional de ingresos de las microempresas y autónomos (con hasta 10 empleados), y un 20% para el resto de empresas, con una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto.



- Ayudas para la reestructuración de deuda financiera COVID.

Este eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.

Este eje se ve apoyado mediante la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.

Las Líneas de Avaes del ICO, puestas en marcha en 2020, han permitido movilizar más de 121.000 millones de euros de financiación para autónomos y empresas. La norma aprobada extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO.

En noviembre de 2020 se adoptaron ya medidas para facilitar el pago de estas deudas, al extenderse hasta dos años el periodo de carencia del pago del principal y ampliarse a ocho años el plazo de devolución de los préstamos.

Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se podrán acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; y, en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias, al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.

Como medida de último recurso en este ámbito, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.

Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.

Para la articulación de estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos -similar al existente en el ámbito hipotecario-, cuyo objetivo es favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia.



- Fondo de recapitalización de empresas medianas.

Para los casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes, se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID-19, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.

Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), empresa con capital público-privado.

Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones de euros.

Además de las tres líneas de ayuda arriba expuestas, se aborda la modernización de la normativa concursal para favorecer la continuidad de la actividad empresarial. Así, el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, establece también medidas en el ámbito concursal, extendiéndose hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.

De forma específica, se extienden las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago (ambos son instrumentos previos al concurso), como los propios convenios concursales; y se amplían hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.

Esta extensión proporcionará un periodo para abordar los procesos de análisis y reestructuración de las empresas sin desencadenar una innecesaria pérdida de valor en tanto se moderniza y agiliza el régimen concursal, favoreciendo la acción temprana y los acuerdos de reestructuración de las deudas con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo, con ocasión de la transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.



Adicionalmente, con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas, se amplían los plazos de ejecución de proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y de los préstamos concedidos por Emprendetur a empresas del sector turístico.

También se aumenta a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.

Además, la norma regula la posibilidad de que las sociedades anónimas que no hayan podido modificar sus estatutos puedan seguir celebrando la junta general o asamblea de socios por medios telemáticos durante el ejercicio 2021, siempre que se garantice la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por distintas vías.

Madrid, 04 de mayo de 2021